

Santiago, nueve de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En los autos sobre indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, tramitados ante el Undécimo Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-12706-2018, caratulados “Constructora Áridos Teno S.A. con Finning Chile S.A.” por sentencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se acogió la demanda deducida por Constructora Áridos Teno Ltda. en contra de Finning Chile S.A. en aquella parte que accede al lucro cesante por la suma de \$7.000.000 mensuales, estableciéndose la época de pérdida la que va desde el 1 de octubre de 2017 y hasta que quede ejecutoriada la presente sentencia y cada parte soportará sus costas.

La demandada dedujo recurso de casación en la forma y apeló de dicho fallo y una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de dos de diciembre de dos mil veintidós, rechazó el recurso de nulidad y confirmó la decisión.

En contra de esta última decisión la misma parte dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de casación en la forma:

PRIMERO: Que la recurrente de nulidad afirmó que el fallo cuestionado ha incurrido en la causal de invalidación formal contenida en el cuarto numeral del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en su variante de extra petita, al alterar la causa de pedir de la acción de responsabilidad deducida en base al estatuto de la responsabilidad extracontractual y al decidir el fallo recurrido bajo el estatuto de la responsabilidad contractual, incurriendo en el vicio de casación que se denuncia, al apartarse radicalmente de los términos en que se situó la controversia.

Agregó que la segunda variante de la causal invocada en que incurre el fallo lo es al haber condenado a su parte, a título de lucro cesante, a la suma indeterminada de \$7.000.000 mensuales desde el 1° de octubre de 2017 y hasta que quede ejecutoriada la sentencia y no a la suma de \$56.000.000, peticionada en la demanda, otorgando más de lo pedido por el demandante.

Peticionó que se acoja el recurso y anule la sentencia definitiva y dicte fallo de reemplazo que rechace la demanda, con costas.

SEGUNDO: Que en relación con el vicio de ultra petita, esta Corte de Casación ha establecido que aquélla concurre cuando la sentencia, apartándose



de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera su contenido, cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. La regla anterior debe necesariamente concordarse con el artículo 160 del estatuto antes citado, de acuerdo al cual las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por los litigantes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio.

Por ende, el referido vicio formal sólo se verifica cuando la decisión otorga más de lo solicitado en los escritos de fondo por medio de los cuales se fija la competencia del tribunal, o cuando se emite pronunciamiento en relación a materias no sometidas a su conocimiento en franco quebrantamiento de la correlación o correspondencia que ha de imperar en la actividad procedimental.

El principio rector del instituto en referencia es el de la congruencia procesal, que dentro del procedimiento encuentra diferentes fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. En virtud de dicha directriz es que se produce la vinculación de las partes y del juez con el debate, guardando el necesario encadenamiento de sus actos, permitiendo que éstos alcancen eficacia. Sustancialmente, se refiere a la conformidad que ha de existir entre la sentencia expedida por el órgano jurisdiccional y las pretensiones que las partes hayan expuesto oportuna y formalmente en sus escritos fundamentales agregados al proceso.

TERCERO: Que, conviene asentar que, en el presente caso, en la demanda la actora dedujo sólo una acción, la de responsabilidad extracontractual, aseverando que concurrían todos los presupuestos o condiciones de la responsabilidad aquiliana y, en particular, que la culpa se configuraba al no contar la demandada con medidas de seguridad suficientes para evitar el robo del vehículo que le había sido entregado para su reparación, en su calidad de servicio técnico autorizado de la marca. La demandada contestó, en lo pertinente, alegando la improcedencia de la acción entablada atendida la existencia de un contrato de depósito entre las partes, de modo que cualquier eventual responsabilidad que pudiese generarse de aquel vínculo contractual, lo que en todo caso negó, debía regirse por las normas establecidas a propósito del régimen de la responsabilidad contractual y no por las de responsabilidad extracontractual. El juez de primer grado, en su sentencia acoge la acción de indemnización de perjuicios fundándola,



empero, en el régimen de responsabilidad contractual que no ha sido fundamento de la demanda, al establecer en el considerando sexto que el vínculo contractual que las partes suscribieron es “un contrato innominado de prestación de servicios mecánicos, en donde el prestador del servicio se obliga a la reparación del vehículo, para lo cual recibe en sus dependencias el bien en cuestión, recepción que le impone el cuidado y custodia”, agregando, en el considerando séptimo, “que la imputación de responsabilidad, formulada en la demanda, sólo se basa en la infracción al deber de cuidado y custodia, obligación que es de carácter general respecto de cualquier persona que tenga bajo su esfera de protección/uso/cuidado un bien”, desatendiendo así el planteamiento de la demandada respecto a la limitación de cúmulo de responsabilidad. Finalmente, la Corte de Apelaciones, al confirmar la sentencia de primer grado, agregó que “el principio *iura novit curia* (en general, el juez conoce el Derecho) permite el tribunal fundar su decisión en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieran invocado, quedando únicamente vinculado por la causa de pedir y el objeto pedido”, y “Que, en este caso, no se advierte modificación de la causa de pedir ni del objeto pedido, por lo que el tribunal está facultado para dictar sentencia aplicando el estatuto de la responsabilidad contractual”.

CUARTO: Que esta Corte ha sostenido reiteradamente que la víctima, no puede ser privada del derecho de optar por el estatuto que utilizará para reclamar la reparación que pretende a modo de indemnización de perjuicios, es decir, de elegir o escoger, entre el ejercicio de la acción por responsabilidad contractual o el de la acción por responsabilidad delictual, al presentarse como en el caso de autos, tanto un incumplimiento a una obligación contractual y a una obligación legal, las que tienen un mismo objeto. (rol N°14.734-2020; rol N°45.582-2017; rol N°73.907-2016; rol N°38.151-2016; rol N°31.061-2014; y rol N°23.871-2014, todos Corte Suprema).

Sabido es que la tesis de la opción tiene límites tanto sustantivos como procesales, dentro de estos últimos, determinada doctrina sostiene que “Las limitaciones procesales son tan importantes como las sustantivas. En primer lugar, debe convenirse que la opción por la responsabilidad extracontractual puede ser ejercida sólo por la víctima demandante, no por el demandado ni tampoco por el juez. La opción debe ser ejercida al momento de interponerse la demanda, aunque puede aceptarse que, conforme a la facultad contemplada en el art. 17 inc. 2° del Código de Procedimiento Civil, el perjudicado deduzca



la acción de responsabilidad extracontractual y, en forma subsidiaria, para el caso de que el juez no la estime procedente, la de responsabilidad contractual. Una vez notificada la demanda y trabada la litis, no puede el demandante variar la opción.”(Corral Talciani, Hernán (2010). El Concurso de responsabilidades en el Derecho de daños chileno. Defensa y delimitación de la Teoría de la opción, en AA. VV., Estudios de Derecho Civil V, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Concepción 2009, Abeledo Perrot, p. 652).

QUINTO: Que, conforme a lo que se viene analizando el límite del *iura novit curia* está dado por la congruencia. En términos simples, el juez debe fallar la acción que ha sido ejercida y no otra, someter su actuar a los términos en que las partes han fijado el debate. Como este asunto exige distinguir idealmente una acción de otra, a la causa de pedir y, en específico, al componente normativo de la misma. Una cosa es la fundamentación de la demanda y otra, sus fundamentos. Si la primera está constituida por los motivos jurídicos que, a juicio de las partes, explican porqué el Tribunal debiese hacer lugar a su pretensión, la segunda en cambio tiene que ver con el rótulo jurídico que las partes le atribuyen a los hechos. Puestos frente a la congruencia y al *iura novit curia*, el Tribunal puede desatender lo primero, pues solo tiene una finalidad persuasiva.

En consecuencia, puede acoger la demanda por motivos diversos a los enarbolados por las partes, pero en caso alguno puede desatender lo segundo, pues la calificación jurídica, la relevancia que le den a uno u otro hecho, es una labor de resorte exclusivo de las partes. Solo ellas determinan cómo y de qué forma ingresan el hecho al debate.

Es ese el motivo que explica porqué el juez no puede acoger una demanda de indemnización de perjuicios fundado en un régimen de responsabilidad diverso del invocado por el demandante en su libelo. Dicho de otro modo, si el demandante ha planteado que el hecho dañoso constituye un ilícito civil, el Tribunal luego no puede dar lugar a la demanda de indemnización estimando como hecho dañoso el incumplimiento de un contrato o viceversa.

SEXTO: Que así además se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Suprema y ha concluido que existe extra petita en ocasiones en que los tribunales de instancia han accedido a pretensiones en virtud de estatutos de responsabilidad diversos a los invocados por los actores. Así se advierte en un caso en que habiéndose reclamado responsabilidad extracontractual, el tribunal accedió a la pretensión indemnizatoria en razón de haberse



acreditado los elementos de la responsabilidad contractual, señalando en su consideración cuarta que "... cabe destacar que tanto en el cuerpo de la demanda como en el petitorio de la misma se pide tener por interpuesta demanda civil por responsabilidad extracontractual en contra del Banco de A. Edwards..., todo lo que determina sin lugar a dudas, que éste constituye el fundamento y la petición concreta de la demanda, y por lo tanto, únicamente a esa naturaleza de responsabilidad han debido atenerse los jueces del fondo al decidir en la sentencia definitiva". (Corte Suprema, sentencia de casación, 31 de julio de 2006, Rol N° 2.983-2004).

SÉPTIMO: Que en consecuencia, en el presente caso al haber el demandante planteado que el hecho dañoso constituye un ilícito civil, el Tribunal al acceder a la pretensión indemnizatoria, en razón de haberse acreditado los elementos de la responsabilidad contractual alteró la calificación jurídica de los hechos planteada por el demandante, siendo forzoso concluir que existe ultra petita al haber accedido a pretensiones en virtud de estatutos de responsabilidad diversos a los invocados por el actor, lo que llevará a acoger el recurso.

Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 764, 765, 766, 768 y 786, **se acoge** el recurso de casación en la forma interpuesto por el abogado Ramón Domínguez Hidalgo, en representación de la demandada en contra de la sentencia de dos de diciembre de dos mil veintidós, la que se invalida, y se procede a dictar en forma inmediata, sin nueva vista y en forma separada, la de reemplazo que corresponda.

Téngase por no interpuesto el recurso de casación en el fondo.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Gonzalo Ruz L.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 170.478-2022

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora María Soledad Melo L. y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz L.



ARTURO JOSE PRADO PUGA
MINISTRO
Fecha: 09/07/2024 12:29:17

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
MINISTRO
Fecha: 09/07/2024 12:29:18

MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO
GARCIA
MINISTRA
Fecha: 09/07/2024 12:31:36

MARIA SOLEDAD MELO LABRA
MINISTRA
Fecha: 09/07/2024 12:31:37

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 09/07/2024 13:07:39



PXKKXXXZDNR

En Santiago, a nueve de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, nueve de julio de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los motivos cuarto a décimo tercero, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

1º Que, cabe recordar que es perfectamente posible que un mismo hecho sea constitutivo al mismo tiempo de un incumplimiento contractual y de un ilícito extracontractual, surgiendo entonces lo que se ha denominado por la doctrina moderna “concurso de normas” haciendo referencia al hecho de que, en estos casos, la pretensión indemnizatoria se sostiene en órdenes diferentes de normas o estatutos jurídicos: contractual y extracontractual. De esta forma se puede afirmar que, en el caso que nos ocupa, se está frente a la coexistencia de las mencionadas responsabilidades y por lo tanto surge como lógica consecuencia la concurrencia de acciones de las que es titular el acreedor o víctima del daño, las que en verdad y sin perjuicio del tratamiento dual que les otorga nuestro ordenamiento jurídico poseen la misma naturaleza desde que en cualquiera de los estatutos anotados estamos en presencia de una acción indemnizatoria.

No se puede perder de vista que a pesar de sus diferentes regulaciones, tanto el incumplimiento contractual como el hecho ilícito son manifestaciones de una actuación contraria a derecho de la que surge la obligación de indemnizar el daño provocado, similitud que resulta más patente en aquellos casos en que la misma conducta es constitutiva tanto del uno como del otro.

2º Que esta Corte ha sostenido reiteradamente que la víctima, no puede ser privada del derecho de optar por el estatuto que utilizará para reclamar la reparación que pretende a modo de indemnización de perjuicios, es decir, de elegir o escoger, entre el ejercicio de la acción por responsabilidad contractual o el de la acción por responsabilidad delictual, al presentarse como en el caso de autos, tanto un incumplimiento a una obligación contractual y a una obligación legal, las que tienen un mismo objeto. (rol N°14.734-2020; rol N°45.582-2017; rol N°73.907-2016; rol N°38.151-2016; rol N°31.061-2014; y rol N°23.871-2014, todos Corte Suprema).

3º Que en similar sentido el profesor Enrique Barros Bourie expresa que la doctrina dominante en el derecho comparado señala “que no hay razón lógica para excluir la aplicación del estatuto de responsabilidad



extracontractual. El argumento determinante radica en que los deberes generales de cuidado que se tienen respecto de la persona y la propiedad de los demás pueden ser definidos por el contrato (y, en tal sentido, el contrato predomina); por el contrario, a falta de esa determinación convencional, no se puede entender que haya intención implícita de excluir la aplicación de norma alguna del derecho común. Por eso a falta de regla contractual que excluya la aplicación de algún ordenamiento, debe entenderse que el actor puede optar por el estatuto legal que le resulte más conveniente, a menos que haya alguna razón específica para que prevalezca el estatuto contractual.” (Barros Bourie, Enrique (2007); “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1ª edición, p. 1060).

4° Que, de esta manera, a la actora se le permitir la libre elección del régimen indemnizatorio en un caso de concurso de responsabilidades y por lo tanto siendo el fundamento y la petición concreta de la demanda la indemnización de perjuicios que se pone en movimiento a través de esta acción en sede de responsabilidad extracontractual, se debe determinar si concurren en la especie los presupuestos de la responsabilidad aquiliana en que se fundamenta la acción.

5° Que tradicionalmente se ha sostenido que de los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código Civil se desprende que, para que un hecho u omisión genere responsabilidad civil extracontractual, es menester: a) que su autor sea capaz de delito o cuasidelito; b) que el hecho u omisión provenga de dolo o culpa; c) que cause daño; y d) que entre el hecho o la omisión dolosa o culpable y el daño exista una relación de causalidad (Alessandri R., Arturo, (1983), “De la Responsabilidad Extra-contractual en el Derecho Chileno”, Tomo I, Santiago, Ediar Conosur).

Ningún cuestionamiento existe acerca del hecho que la demandada no cumpla con el primer requisito, este que sea capaz de delito o cuasidelito.

En cuanto al nexo causal que debe existir entre el comportamiento voluntario e ilícito del autor y el daño sufrido por la víctima, requisito que por lo demás es común a todos los sistemas de responsabilidad, esta Corte ha señalado que “la relación de causalidad no está definida por el legislador, por lo que debe entenderse en su sentido natural y obvio ... entre un acto ilícito y un determinado daño existirá relación causal si el primero engendra al segundo y éste no puede darse sin aquel” (Sentencia de 16 de octubre de 1954, RDJ tomo LI, sección primera, p. 488).



En palabras del profesor Alessandri, “un delito o cuasidelito civil obliga, por tanto, a la indemnización cuando conduce a un daño, cuando éste es su resultado, cuando el daño se induce de él, cuando el daño puede atribuirse a la malicia o negligencia de su autor” (o. cit. p.174).

6° Que en el caso que nos convoca, la demandante Constructora Áridos Teno Ltda. imputa responsabilidad a Finning Chile S.A. en la pérdida del vehículo que la primera arrendaba a la sociedad Caterpillar Leasing S.A. al haber sido sustraído desde las dependencias de la demandada, a quien le había sido entregado éste para su reparación, en su calidad de servicio técnico autorizado de la marca, quien no adoptó las medidas de seguridad necesarias y adecuadas a fin de que ello no ocurriera, lo que en definitiva la privó del uso, causándole los perjuicios materiales y morales, que reclama.

7° Que conforme se señaló por el considerando 3° de la sentencia en alzada se tuvieron por acreditados, por no existir controversia o disputa entre las partes, los siguientes hechos:

a.- Caterpillar Leasing Chile S.A. es propietario del vehículo placa patente única JFSK-32.

b.- Con fecha 26 de octubre de 2016 Constructora Áridos Teno Ltda. suscribió un contrato de leasing con Caterpillar Leasing S.A., mediante la cual arrendó, con opción de compra, el vehículo placa patente única JFSK-3.

c.- El día 17 de agosto de 2017 Constructora Áridos Teno Ltda. ingresó el vehículo placa patente única JFSK-32 a dependencias de Finning Chile S.A. a fin de efectuarle reparaciones.

d.- El 1 de octubre de 2017 el vehículo placa patente única JFSK-32 fue sustraído, por terceros, desde las dependencias de Finning Chile S.A.

8° Que, correspondiéndole a la actora la carga de acreditar que la sustracción del vehículo placa patente única JFSK-32, por terceros, desde las dependencias de Finning Chile S.A se produjo como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adoptada por esta última, conducta negligente que se imputa concretamente a la demandada, la prueba rendida en autos no resultó suficiente. En efecto, la actora aportó las siguientes probanzas al proceso: a. Contrato de Leasing entre Caterpillar Leasing Chile S.A. y Constructora Áridos Teno S.A. de 11 de noviembre de 2016 suscrito entre Constructora Áridos Teno Ltda. y Caterpillar Leasing Chile S.A. N° 6241; b. Guía de despacho N°28 emitida por Transporte Sominerals Limitada, de fecha 17 de agosto de 2017, que da cuenta del “traslado de cargador frontal 950 CG, sin patente” desde Talagante a Quilicura; c. Factura electrónica N°001963427 emitida por Finning Chile S.A. a



Caterpillar Leasing Chile S.A. por el cargador serie M5K01024, cuyo valor asciende a \$139.583.430; d. Certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación en que consta que Caterpillar Leasing Chile S.A. es propietario del vehículo placa patente única JFSK-32; e. Carta emitida por la empresa CAT Financial, de 16 de febrero de 2018, referida al contrato de seguros suscrito por Caterpillar Leasing Chile S.A.; f. Documento denominado “Proposición de Pérdida a Indemnizar”, emitida por la empresa Violler & Asociados, Ajustadores Ltda., de 5 de enero de 2018, referido a “Robo a Cargador Frontal modelo 950G”; g. Dichos de Oneto González, quien declara que el cargador fue robado desde el taller de Finning Chile S.A. al que había llegado para solucionar fallas reportadas, sin que haya sido recuperado. Sabe que botaron la reja y salieron andando con la máquina. Los hechos él se los comunicó al demandante, quien pensó que se lo devolverían y en las mismas condiciones, pues le faltaban 40 cuotas por pagar. Agrega que se había pagado un pie de \$20.000.000 y las cuotas hasta el robo. Responde señalando que esa máquina se arrienda por horas y el valor aproximadamente es de \$7.000.000 mensuales. La propuesta inicial de la compañía de leasing fue entregar un cargado de iguales o similares características, lo que no fue aceptado; h. Declaración de Aranda Díaz quien expone que Constructora Áridos Teno Ltda. suscribió un contrato de leasing respecto de una máquina industrial, la que fue robada desde las dependencias de Finning Chile S.A., lugar al que había llegado por desperfectos mecánicos o técnicos, lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017. Por la máquina había pagado \$25.000.000 o \$28.000.000 y 47 o 48 cuotas de \$2.600.000, la que mensualmente generan \$7.000.000.

Como se advierte, ninguna prueba se aportó relativa al reproche que se formula a la demandada de que las circunstancias en que acaeció el robo del vehículo se debieron a su conducta negligente o a la omisión de aquellas medidas de seguridad de debieron haberse adoptado para evitar su ocurrencia.

Así las cosas, aparece que el primer presupuesto o condición para que pueda atribuírsele responsabilidad civil a la demandada, esto es, la existencia de un ilícito civil cometido por su culpa, no ha podido tenerse como concurrente, lo que permitiría desde ya pronunciarse sobre el rechazo de la demanda.

9º Que, aun cuando hipotéticamente pudiera entenderse superado el obstáculo anterior, tampoco podría acogerse la demanda, por cuanto se advierte insuficiencia probatoria en la determinación y acreditación del daño cuya reparación se busca.



En efecto, no se puede acceder a lo pedido por daño emergente, que la actora avalúa en \$62.711.211, más los intereses, y reajustes correspondientes, cantidad que estaría determinada por las cuotas pagadas a la fecha, en virtud del contrato de leasing suscrito para el arriendo del vehículo siniestrado, con Caterpillar Leasing Chile S.A., a que se hizo referencia en el literal a) del considerando 8° precedente.

En primer lugar, salta a la vista la dificultad de tener a ese capítulo de daños como un perjuicio que sea una consecuencia inmediata y directa del hecho generador que se le imputa, en todo caso no se trataría de un daño emergente presente ni futuro, y, además, representa un desembolso patrimonial en el que incurrió para el uso del vehículo que efectivamente realizó mientras este estuvo en su poder; y, en segundo lugar, porque en todo caso correspondía a la actora probar el hecho de haber pagado las referidas cuotas y ninguna prueba rindió a ese respecto.

10° Que tampoco podría accederse a la pretensión de indemnizar el lucro cesante demandado, que la actora construye a partir del valor mensual de producción del cargador, que ascendería a \$7.000.000, por lo que contado desde el 17 de agosto de 2017 equivale a \$56.000.000, más los meses que dure la tramitación del juicio.

El lucro cesante se ha entendido como una proyección de un beneficio o ganancia legítima que, siguiendo un curso normal de acontecimientos, le hubiera significado a la víctima percibir y que la comisión del ilícito civil precisamente le impidió. Es reparable, siempre que existan elementos objetivos que sirvan para proyectar en el tiempo, razonablemente, la certeza de ese ingreso, beneficio o utilidad perdida. Dicho de otro modo, la determinación de la extensión de la reparación de este tipo de daño pasa por un ejercicio de prolongación cierta y directa del estado de cosas existente al momento de la perpetración del delito o cuasidelito civil como si hubiera ello objetivamente podido ser medido en ese momento siguiendo un curso normal u ordinario de las cosas. De ahí que, los que reclaman la reparación de este daño, se encuentran en la necesidad de aportar antecedentes objetivos que demuestren al juez la pérdida de ingresos, utilidades o beneficios en su actividad económica que sufrieron como consecuencia del hecho generador del daño.

11° Que, considerando lo anterior y teniendo en cuenta que la actora fundó este capítulo de daños en el valor que resulta de considerar que el cargador producía mensualmente \$7.000.000, debiendo calcularse desde el 17 de agosto de 2017 hasta el término del proceso, ninguna prueba rindió de que



esas hayan sido las utilidades, o valor mensual de producción como lo denomina en su demanda, que la explotación del vehículo le generaba. La declaración de los testigos Oneto González y Aranda Díaz, quienes se limitaron a declarar que la máquina mensualmente generaba \$7.000.000, sin dar razón suficiente de sus dichos, hace que sus testimonios no cumplan con los requisitos de la regla 2ª del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, para constituir así plena prueba de este hecho. Tampoco parece razonable, en la hipótesis que así se hubiese acreditado, que la demandada tenga el deber de asumir las pérdidas futuras de la demandante sin que resultaran acreditadas las ganancias probables hasta el término del proceso, pues si bien se acepta indemnizar una ganancia hipotética está siempre debe ser probable, juicio que sin duda se aleja en la medida que las proyecciones futuras sean también lejanas y su base de cálculo es vaga e imprecisa, al no considerar los gastos en que se incurrió para obtener dichas utilidades, siendo también insuficiente para ello la declaración de los testigos Oneto González y Aranda Díaz.

12º Que, finalmente, tampoco podría concederse la indemnización del daño moral pretendido por la actora y que se traduciría “en la pérdida de confianza del mercado, tanto por entes privados como públicos, puesto que debido a la negativa injustificada a cubrir el siniestro mi representada aparece comercialmente como morosa en dicha obligación e incumpliendo contratos celebrados por terceros. Daños que son valorados en \$50.000.000.”

Aun cuando se discute, en doctrina, la admisión irrestricta de la reparación de este tipo de daños extrapatrimoniales en las personas jurídicas, esta Corte ha sostenido que “para pretender ser indemnizado por el daño a la imagen de una empresa, es necesario demostrar que ha existido lesión a la imagen de una empresa, y acreditar, de una manera cierta, las consecuencias económicas en que se ha traducido ese desprestigio” (Corte Suprema, 31 de octubre de 2012, Rol N°3325-2012). En ese orden de ideas, ha sido la propia actora la que ha señalado que la pérdida de confianza del mercado, lo que puede entenderse como afectación a su imagen o prestigio, se ha debido a que aparece comercialmente como morosa e incumpliendo contratos celebrados con terceros, lo que le imponía la carga de acreditar, de una manera cierta, esas consecuencias económicas lesivas, sin embargo, ninguna prueba se rindió al efecto.

13º Que por las razones expuestas precedentemente la demanda será rechazada, sin costas por tener la actora motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 160, 186 y 471 del Código de Procedimiento Civil, se revoca



la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, y en su lugar se resuelve que se rechaza la acción, sin costas por tener la actora motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado integrante señor Gonzalo Ruz L.

Rol N° 170.478-2022

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora María Soledad Melo L. y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz L.

ARTURO JOSE PRADO PUGA
MINISTRO
Fecha: 09/07/2024 12:29:19

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
MINISTRO
Fecha: 09/07/2024 12:29:19

MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO
GARCIA
MINISTRA
Fecha: 09/07/2024 12:31:38

MARIA SOLEDAD MELO LABRA
MINISTRA
Fecha: 09/07/2024 12:31:39

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 09/07/2024 13:07:41



En Santiago, a nueve de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

